

NOTAS SOBRE CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

Joan Subirats¹

No creo que existan muchas dudas sobre el hecho que estamos viviendo un periodo de profundos cambios sociales, económicos y políticos. A pesar de ello, seguimos funcionando mentalmente con los imaginarios del bienestar que se construyó en Europa entre mediados 1945 y 1975. Esos 30 años parecen tiempo suficiente como para poder observar, mas allá de la intuición, las líneas maestras de muchos de esas transformaciones en todos los planos de la vida social, que nos conduce a afirmar que estamos viviendo un auténtico cambio de época. El objetivo de estas páginas es discutir sobre la dimensión política de esos cambios y, en particular, sobre el papel en que queda la ciudadanía, la gente y sus organizaciones, en la arena política a la luz de estas transformaciones.

¿De donde venimos?

Muy esquemáticamente, y generalizando de un modo seguramente poco riguroso, pues en países distintos los procesos se han concretado de modo diverso, podríamos caracterizar la época anterior con unas pocas y gruesas pinceladas. Desde un visto de vista económico estaríamos hablando de economías nacionales y comercio y cooperación internacional. De la implantación de los modelos productivos fordistas a través de la instalación en grandes empresas con procesos productivos integrados; y de un mercado de trabajo caracterizado por la existencia de pleno empleo para los hombres cabeza de familia. Desde un punto de vista político estaríamos hablando del protagonismo del Estado-nación en el diseño e implantación de las políticas tanto económicas (inversionistas, monetarias y fiscales) como sociales (redistributivas). Estaríamos hablando también de los partidos de masas como el instrumento político por excelencia para conectar a la sociedad con el estado y acceder al control del gobierno. Y de una democracia claramente representativa e institucionalizada. Socialmente, la historia nos remite a un periodo caracterizado por una estructura social con un fuerte componente de clase, tanto en lo material y laboral como en lo identitario, con una sólida tendencia de homogeneización en las condiciones de trabajo y en los estilos de vida.

El estado tenía en la época anterior una gran preponderancia y protagonismo, haciendo el papel de árbitro e impulsor del diálogo social y los grandes acuerdos socio-económicos de corte neocorporatista entre organizaciones

¹ Joan Subirats es Doctor en Ciencias Económicas, catedrático de Ciencia Política y Director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona

patronales y sindicales. Así los poderes públicos, dirigían la política económica, aseguraban la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y, en definitiva, constituían el garante de elementos clave como: trabajo estable garantizado, estado protector y regulador, y movilidad ascendente en una sociedad abierta. Estos elementos configuraban la tríada conceptual e ideológica de una gran promesa que, construida sobre la hipótesis de un crecimiento- desarrollo ilimitado, ha acabado por convertirse en una profecía incumplida y cada vez más difícil de cumplir. Y vale decir, que ya desde un principio contenía importantes limitaciones y contradicciones, pues siempre fue una gran promesa para los habitantes de los países más desarrollados, que necesitaba, para ser real, de las pobrezas y dependencias de muchos otros países periféricos. Como también desde el principio se adoptó una visión cortoplacista de los recursos naturales que no tenía en cuenta la sostenibilidad del desarrollo económico tal y como se planteaba.

Pasados mas de 30 años de aquellos 30 años (que en Francia algunos califican como los “30 años gloriosos”) podemos ver como muchas cosas han cambiado de forma radical, pero sobre todo, se observan cambios que afectan a las ideas y los procesos sociales, políticos y económicos que eran fundamentales en el dibujo de la época anterior, la de la gran promesa. No estamos hablando, pues, de cambios anecdóticos. Donde antes había un estado-nación regulador y redistribuidor, ahora tenemos un estado desregulador, y más bien dependiente y reactivo a los dictados de la globalización económica. El margen de maniobra de la política económica nacional se ha ido reduciendo, conservando algunos espacios significativos de autonomía en los departamentos inversores en infraestructuras de los gobiernos. El acento se pone ahora en los aspectos financieros, con menores énfasis en las actividades productivas. Si nos fijamos en el mercado de trabajo vemos como la tendencia que hoy domina es la de la precariedad. Frente a la estandarización fordista y la integración de procesos productivos, el concepto reinante hoy en día, y desde hace ya algún tiempo, es el de “flexibilidad” asociada a descentralización de procesos productivos y gestión de la mano de obra. Se han roto las continuidades formación-empleo para los jóvenes y la promoción laboral dentro de la empresa o el sector de actividad. La carrera profesional, se hace inconcebible como proyecto para una gran cantidad de trabajadores que a base de cambiar de empresa, sector y actividad tiene difícil llegar a consolidar un oficio, no digamos ya una carrera.

Finalmente, en el plano sociopolítico, donde antes teníamos fuertes identidades, sindicatos con fuerte implantación y partidos de masas; hoy tenemos una eclosión de identidades diversas junto a la desconfiguración de las tradicionales de clase como resultado de los procesos de fragmentación de la estructura social, incremento de los colectivos en situación de vulnerabilidad social, crecimiento exponencial de los procesos migratorios sur-norte y un fuerte freno a las expectativas de movilidad social.

¿Donde estamos?

Este cambio de época ha supuesto, como venimos diciendo, una serie de transformaciones sociales de hondo calado que viene afectando a todos los órdenes de la vida social: ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos educamos y aprendemos? ¿En que estructuras familiares vivimos? ¿Quiénes son ahora nuestros vecinos? ¿Qué expectativas de vida construimos? ¿De que tiempos disponemos?. No obstante, al objeto de los intereses y la temática que trata de abordar este monográfico, y dadas también las propias limitaciones de espacio de este ejercicio, centraremos nuestros comentarios en apuntar algunas reflexiones que parecen pertinentes en relación al diálogo social y a la participación política de la ciudadanía en esta nueva época. La primera reflexión girará entorno al debate sobre la crisis de la democracia o, también, crisis de la política: ¿los cambios en esta nueva época han dado al traste con las aspiraciones democráticas de la época precedente? ¿Tienen, tenemos, los ciudadanos las mismas oportunidades de participar en la vida política? ¿Tenemos menos? ¿Nos sirven los instrumentos que se construyeron en plena transición política española?. Estas y otras preguntas similares nos servirán para identificar, en un argumento abierto, ciertos síntomas que en mi opinión refuerzan la idea de una crisis del ideal democrático. La segunda reflexión quiere ser esencialmente política, tratando de establecer que podemos entender por diálogo social y participación ciudadana y, muy especialmente sobre que elementos sería conveniente tener en cuenta para una reconstrucción práctica del ideal democrático basada en el impulso de la participación.

¿Qué sociedad nos va apareciendo?. Cabe destacar, en primer lugar, la transición hacia una estructura social mucho más compleja y, como decíamos, fragmentada. Con mayores cotas de diversificación étnica, con gran alteración de la pirámide de edades (con los subsiguientes incrementos de las tasas de dependencia demográfica), y con una gran pluralidad de formas de convivencia familiar. La incorporación de las mujeres al mundo laboral aumenta sin cesar, a pesar de las evidentes discriminaciones que se mantienen. Pero, al lado de lo muy positivos que resultan esos cambios para devolver a las mujeres toda su dignidad y autonomía personal, lo cierto es que los roles en el seno del hogar apenas si se han modificado. Crecen las tensiones por la doble jornada laboral de las mujeres, se incrementan las separaciones y aumentan también las familias en las que sólo la mujer cuida de los hijos. Y, con todo ello, se provocan nuevas inestabilidades sociales, nuevos filones de exclusión, en los que la variable género resulta determinante. Mientras que, por otro lado, siguen sin obtener una valoración adecuada trabajos socialmente imprescindibles, como los relacionados con el cuidado, el cariño, que se consideran como elementos propios del “amor familiar” o del trabajo informal, poco o mal retribuido.

En ese nuevo contexto, las políticas públicas que fueron concretando la filosofía del estado del bienestar, se han ido volviendo poco operativas, poco capaces de incorporar las nuevas demandas, las nuevas sensibilidades, o tienen una posición débil ante nuevos problemas. Las políticas de bienestar se construyeron desde lógicas de respuesta a demandas que se presumían

homogéneas y diferenciadas, y se gestionaron de manera rígida y burocrática. Mientras hoy tenemos un escenario en el que las demandas, por las razones apuntadas más arriba, son cada vez más heterogéneas, pero al mismo tiempo llenas de multiplicidad en su forma de presentarse, y sólo pueden ser abordadas desde lógicas políticas de nueva ciudadanía y con formas de gestión flexibles y desburocratizadas.

Desde luego, la fragmentación de la sociedad, el impacto sobre la esfera laboral de la economía postindustrial y los déficit de inclusividad de las políticas clásicas de bienestar no operan de forma aislada entre sí. Se interrelacionan y, a menudo, se potencian mutuamente. De hecho, las dinámicas de exclusión social se desarrollan al calor de estas interrelaciones. Ciertos colectivos inmigrantes, por ejemplo, no sólo ocupan las posiciones más marginales en la división étnica del trabajo, padecen también obstáculos de acceso a los sistemas de protección social, y son muy vulnerables a la discriminación en el mercado de la vivienda. Sectores de población dependiente, de edad avanzada, quedan con facilidad excluidos de unos servicios sociales con tasas muy bajas de cobertura. O bien comunidades que habitan barrios periféricos segregados sufren con mayor intensidad el desempleo de larga duración, la inserción laboral en precario o el fracaso escolar. En definitiva, se plasma en la realidad el carácter multifactorial y multidimensional de la exclusión y de las erosiones a una concepción de la ciudadanía que se nos ha ido quedando obsoleta por formal y desfasada.

Podríamos afirmar que, al faltar un sentido colectivo de proyecto compartido desde el punto de vista social, y al insistirse desde posiciones neoconservadoras que lo importante es aprovechar las oportunidades que existen, y que la desigualdad no tiene bases sociales, sino que depende del esfuerzo que cada uno despliegue, ello se traslade a las familias como un “sálvese el que pueda”. Y muchos miran al sistema educativo como garantía de mejores oportunidades individuales reforzándose el potencial segmentador e inequitativo que la educación siempre ha tenido. Si hablamos de compromiso cívico, si hablamos de implicación ciudadana, forzosamente deberemos hablar de educación. Pero no confundamos educación con enseñanza infantil y juvenil, formal e informal. Hablemos de educación en un sentido vital. Una educación, una formación, una capacidad de sentirse cuestionado y de buscar respuestas al lado de otras personas, coetáneas, convecinas, colegas de trabajo u ocio, con los que se comparten inquietudes, y dilemas. Entendida de esta manera, la educación ve extender su influencia mucho más allá de lo que era habitual. Siendo desde esta concepción cuando las carencias de la sociedad española se revelan de manera dramática, con grandes sectores sociales con apenas estudios primarios, lo que les deja con muchos menos recursos para afrontar los retos de la nueva realidad social, compleja e individualizadora.

Quisiéramos reivindicar aquí una concepción de la educación más vinculada a su concepción de servicio público, conectando educación con el conjunto de servicios y políticas que buscan la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y el reforzamiento de su papel activo en la renovación democrática y participativa de las políticas de bienestar tradicionales. Si queremos reforzar

el sentido de implicación colectiva, de compromiso cívico, hemos de ser conscientes que hacemos más con nuestro “ruido” (con nuestra actitud, con nuestros actos), que con nuestras palabras. El debate aquí planteado debería poder implicar al conjunto de la ciudadanía en la “cuestión cívica”, yendo más allá de lo que pueda ser un debate entre expertos, y planteando por tanto los debates nucleares que vinculan educación y sociedad, compromiso social y ciudadanía. En este contexto, deberíamos ser capaces de reflexionar sobre qué entender por participación ciudadana y, muy especialmente sobre que elementos sería conveniente tener en cuenta para una reconstrucción práctica del ideal democrático basada en un nuevo impulso por la participación ciudadana y la educación cívica y a lo largo de toda la vida.

No habrá un desarrollo socialmente sostenible de nuestro país sin avanzar en elementos que refuercen las capacidades de autonomía, de asunción de responsabilidades de los espacios públicos, para ir superando las tradiciones de dependencia y de consideración de lo público como algo ajeno